

Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de esta ciudad hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por la querella, y revocó la decisión del juez de instrucción que había declarado extinguida por prescripción la acción penal y sobreseído a Saúl Bouer por el delito de defraudación en perjuicio de la administración pública.

Contra esa resolución, la defensa del imputado planteó recurso de casación, el que denegado dio lugar a la presentación de la correspondiente queja ante la Cámara Nacional de Casación Penal, que fue declarada inadmisibile por la Sala II. Ante ello, se dedujo el recurso extraordinario concedido, por mayoría, a fojas 57/58 vuelta.

-II-

1. Se le imputa a Bouer -ex intendente de esta ciudad- haber integrado, entre los años 1993 y 1997, una organización permanente destinada a facilitar a la firma SIMET S.A., y en perjuicio del erario, el cobro de sumas de dinero por servicios de mantenimiento de espacios verdes y plazas de la zona sur de esta ciudad, que nunca serían realizados.

2. Luego de subsumir el hecho en la figura del artículo 174, inciso 5, del C.P. y ubicar su probable consumación en los meses de agosto y noviembre de 1997, el juez de instrucción declaró prescripta la acción penal porque desde esa fecha el imputado no había sido llamado a prestar indagatoria ni se habían producido otros actos interruptivos en los términos de la ley 25.990, cuya aplicación entendió más beneficiosa.

3. La cámara de apelaciones, acogiendo el pedido de la querella, revocó esa decisión, para lo cual recalificó provisoriamente la conducta y la encuadró en los tipos de los

artículos 210, 260 y 261 del C.P. Asimismo encomendó la pronta terminación del sumario, para lo cual se debía determinar quién o quiénes tenían la administración de los fondos de la ex municipalidad capitalina y, a partir de allí, delimitar las responsabilidades que le pudieran caber a Bouer -y a sus coimputados- en la posible malversación de caudales públicos.

4. En el recurso de casación y en el de queja por denegación de aquél, la defensa asimiló a definitivo el fallo por entender que el proceso excedió su razonable tramitación. En cuanto al fondo, adujo arbitrariedad porque se omitió analizar lo expuesto por esa parte en la instancia de apelación, en cuanto a que: a) desde la renuncia de Bouer como intendente (5 de septiembre de 1994), transcurrieron los doce años que establece el artículo 62, inciso 2º, del C.P.; y b) a partir de ese día el imputado no tuvo injerencia en el hecho, y dado que éste habría sido cometido con anterioridad a la reforma introducida por la ley 25.188, corresponde aplicar la vieja redacción del artículo 67, que no preveía la suspensión de la acción penal para los delitos cometidos por el funcionario público en el ejercicio de su cargo y para los demás partícipes del hecho.

El a quo declaró inadmisibile el recurso de queja por casación denegada, con el argumento de que no correspondía equiparar a definitiva la decisión impugnada, en razón de que no se advertía ni se había demostrado una injustificada prolongación del proceso.

5. En el recurso extraordinario la defensa mantiene los agravios planteados en las instancias anteriores e invoca violación de la garantía de plazo razonable, alegando que en diez años de iniciado el proceso (6 de marzo de 1998) el imputado fue citado a declarar recién el 31 octubre de 2007, con el único fin de interrumpir el curso de la prescripción.

Procuración General de la Nación

Refiere también que la casación incurrió en arbitrariedad al omitir valorar las circunstancias de la causa, para constatar si el cúmulo de años que lleva de trámite es o no razonable.

Al resolver sobre la admisibilidad del remedio federal, el a quo, por mayoría, entendió que impedir su progreso formal por falta de sentencia definitiva equivaldría a decir que el fondo de la decisión de esa Sala es correcta y que la parte no tiene derecho a que la Corte declare si este es un caso en el que el rechazo de la prescripción reúne aquel requisito. Agregó, que una solución de ese tipo en temas como el propuesto, debería restringirse a los supuestos en los que la cuestión federal es planteada de modo insustancial, o en aquellos donde el Tribunal ha sido constante en desconocer el carácter definitivo de una decisión como la que se recurre.

Finalmente, teniendo en cuenta lo que argumenta la defensa en este punto, y lo que sostiene sobre que "la decisión de llamar a indagatoria habría tenido por único objeto interrumpir el curso de la prescripción", concedió el recurso federal con base en la doctrina de la Corte que permite que ciertas decisiones sobre prescripción de la acción penal puedan asimilarse a definitivas, a los fines del artículo 14 de la ley 48.

-III-

Como surge de la reseña efectuada en el apartado anterior, los argumentos de la recurrente en esta oportunidad no difieren de los desarrollados en su presentación directa ante la cámara de casación, donde también invocó la prolongada duración de la causa.

En cambio, en las resoluciones del a quo se denegó, primero, la revisión casatoria por ausencia de sentencia definitiva o equiparable a tal, e inexistencia de cuestión fe-

deral, y después, acogiendo el alegato de la parte sustentado en una posible afectación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable, se tuvieron por satisfechos esos requisitos y se habilitó el acceso a la Corte.

Con lo que la cámara de casación, en el marco de un cambio en la composición de sus jueces, terminó coincidiendo con el planteo de la defensa en cuanto a que se deben despejar los óbices formales para que un tribunal superior examine el caso a la luz de la doctrina de V.E. sobre extinción de la acción penal por duración excesiva del proceso. Y en esta opinión subyace, indudablemente, una evaluación primaria de cuestiones concretas de hecho y derecho procesal -los avatares de la causa- que, en principio, no debe ser discutida por la Corte.

De ser así, y siguiendo con este orden de razonamiento, surge evidente que esta última postura de la casación trae como consecuencia inmediata el reenvío de la causa para que la cuestión propuesta sea estudiada por esa instancia, según la doctrina del precedente "Di Nunzio" (Fallos: 328:1108), que estableció que "siempre que se invoquen agravios de naturaleza federal que habiliten la competencia de [la] Corte, por vía extraordinaria en el ámbito de la justicia penal nacional conforme el ordenamiento procesal vigente, estos deben ser tratados previamente por la Cámara Nacional de Casación Penal, en su carácter de tribunal intermedio, constituyéndose de esta manera en tribunal superior de la causa para la justicia nacional en materia penal, a los efectos del art. 14 de la ley 48" (considerando 13 del voto de la mayoría).

Por lo tanto, opino que V.E. puede, haciendo lugar al recurso extraordinario, devolver las actuaciones a la cámara de casación para que habilite su instancia y analice la

Procuración General de la Nación

cuestión de fondo alegada por la parte, en los términos de la doctrina de plazo razonable del proceso (Fallos: 272:188; 300:1102; 322:360, disidencia de los jueces Petracchi y Boggiano, a la que remite la mayoría en Fallos: 327:327, y en sentido similar Fallos: 327:4815).

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2009.

ES COPIA

LUIS SANTIAGO GONZALEZ WARCALDE